

Paz con dignidad

José Luis Calva*

El gobierno federal lanzó, a fines de abril de 1916, un ejército de 30 000 hombres al mando del general Pablo González para combatir la insurgencia zapatista. En sólo mes y medio de "campana", las tropas de González ocuparon poblado tras poblado la zona de los valles surianos, saqueando, incendiando, violando mujeres y asesinando hombres, niños, ancianos y mujeres. Los combatientes zapatistas desaparecían de los pueblos y campos de sembradura para reaparecer en las montañas, aprestándose a librar una prolongada guerra de guerrillas.

Toda la experiencia de la guerra de guerrillas contra el ejército federal de Díaz, de Madero [después de que incumplió las promesas agrarias del Plan de San Luis y —con esa extraordinaria *ceguera política*, que finalmente le costaría la vida— exigió el desarme unilateral e incondicional de los zapatistas, enviando en su contra tropas federales: JLC] y de Huerta, volvía a ser puesta en práctica por el campesinado zapatista. En poco tiempo, el ejército ocupante sintió que se había metido en una trampa, y que fuera de las poblaciones y las líneas de comunicación principales, el estado de Morelos seguía bajo el control de las fuerzas de Emiliano Zapata.¹

"La reacción de González ante el resurgimiento zapatista fue invariablemente estúpida". Su táctica "consistió en «proceder con extraordinaria severidad» contra los pueblos, en los que ya no había gente que hiciese resistencia activa. Y por sus procedimientos particulares, confirmó su fama de ser heredero espiritual inmediato de la figura más infame de la historia de Morelos, Juvencio Robles", el sanguinario jefe de las tropas de "pacificación" enviadas previamente por Madero.² Conforme

* Coordinador del Área de Estudios Prospectivos de la Estructura Económica de México, IIEC., UNAM.

¹ Gilly, Adolfo, *La revolución interrumpida*, México, El Caballito, 1971.

² Womack Jr., John. *Zapata y la Revolución Mexicana*, México, Siglo XXI editores, 1970.

más audaz y activa se volvía la resistencia zapatista, mayor era el desconcierto y la desmoralización de las tropas de ocupación y de su general.

González se había vuelto letalmente impaciente. A medida que se fue atascando su campaña de limpieza, hasta el no hacer el ridículo fue convirtiéndose en un problema. Semana tras semana tenía que comunicar informes de que se habían perdido más aldeas, de que se habían sufrido bajas de un centenar o más de constitucionalistas. En su frustración, los comandantes subordinados descargaban su cólera sobre todo lo que encontraban. El 30 de septiembre, el coronel Jesús Guajardo dio muerte a 180 residentes de Tlaltizapán, hombres, mujeres y niños. Y el saqueo continuó, con el mismo desenfreno de siempre. A fines de diciembre los constitucionalistas comenzaron a salirse de Morelos llevándose consigo todo lo que podían.³

Ocho décadas después, en el umbral del tercer milenio, el gobierno federal envió un ejército de 30 000 hombres para cercar a los insurgentes zapatistas de Chiapas, con la orden o *práctica* reciente —amparada *apolíticamente* en la *Ley de armas de fuego*, pero violatoria de la *Ley para el diálogo*— de hostilizar sus bases sociales de apoyo en poblados y rancherías. Ciertamente, las tácticas de guerra y las circunstancias nacionales e internacionales no son las mismas de principios de siglo.

Sin aventurar ninguna hipótesis acerca de sus posibles nexos con esferas del poder civil o militar, un tercer actor aparece en el escenario chiapaneco: los escuadrones paramilitares. Sus antecedentes remotos provienen de otra historia allende el océano. En 1921, Mussolini se presentó ante Italia como el jefe de la *contrarrevolución preventiva*, mediante acciones terriblemente espectaculares de sus escuadras armadas de *fascios*, las cuales, apoyadas *pasiva o activamente* por la policía y el ejército, emprendieron la destrucción de las ligas de *braccianti*, defensoras de los jornaleros agrícolas y abanderadas de la demanda campesina ancestral: *la terra ai contadini*. Los grandes terratenientes entregaban fuertes sumas para el financiamiento de estas escuadras y aún los campesinos ricos apoyaban a los *fascios* con dinero y hasta con reclutas (en la zona de Mortara, por ejemplo, los grandes agricultores pagaban a los *fascios* 4

3 *Ibid.*

francos por *pertica* de tierra —medida agraria local equivalente a 796 m²— y el resto 2 francos por *pertica*). A sangre y fuego los fascistas dieron cuenta en unos cuantos meses de las organizaciones de *braccianti*, convirtiendo a éstos en los primeros perdedores del ascenso fascista que desembocó en la trágica historia por todos conocida. Desde luego, quienes desde las altas esferas del poder apoyaron a los *fascios*, *activamente o por omisión*, terminaron siendo también víctimas del fascismo, como *aprendices de brujo* ignorantes de las fuerzas que contribuían a desatar.

El antecedente más próximo de la masacre de Acteal, sin embargo, se encuentra en las tácticas de contrainsurgencia aplicadas en América Central. Recuérdese especialmente el caso de El Salvador, donde los grandes terratenientes y la derecha salvadoreña financiaron escuadrones armados que bañaron de terror y sangre la campiña salvadoreña. El objetivo antiinsurgente, sin embargo, no fue conseguido; al contrario, la insurgencia revolucionaria se fortaleció; y el experimento fascista de contrainsurgencia desembocó en un callejón sin salida de violencia civil y militar. Como es sabido, la solución pacífica fue auspiciada desde fuera, por el Grupo Contadora con la destacada participación de México (*candil de la calle... reza el adagio*). Gobierno salvadoreño e insurgencia revolucionaria negociaron la única salida *realista* de la guerra civil: la transacción *política* digna para ambas partes. El Salvador entró así en un periodo de estabilidad política basado en instituciones democráticas, que ha propiciado, en los años subsecuentes, un notable auge económico. No obstante, aún quedan *polvos de aquellos lodos*: algunas escuadras paramilitares continúan cometiendo actos individuales de violencia, causando tremendas vergüenzas y dolores de cabeza al gobierno y a la sociedad, mientras que la insurgencia revolucionaria está plenamente integrada a la vida política pacífica.

Hoy día, el *problema inmediato* mayor para la paz social en Chiapas no son los zapatistas —que se mueven exclusivamente por medios pacíficos, en espera de la reanudación del diálogo y del cumplimiento de acuerdos previamente negociados— sino la pacificación de los antizapatistas, cuales-

quiera que puedan ser, o no ser, sus nexos con altas esferas del poder castrense o civil.

Madero fracasó en su intento de pacificación al proponer a Zapata *el desarme* unilateral e incondicional de sus tropas, sin ofrecer a cambio nada, más que promesas; y fracasó en su intento de exterminar la insurgencia zapatista mediante las tropas del general Juvencio Robles. Carranza tropezó con las mismas dos piedras: la soberbia pretensión del *desarme* incondicional; y la intención de exterminio de la insurgencia mediante las tropas del general Pablo González.

La pacificación real y permanente de los zapatistas de Morelos sólo fue factible cuando el gobierno federal, bajo la presidencia del general Alvaro Obregón, concedió a los zapatistas la opción de una paz digna, que implicó, por una parte, la aplicación acelerada de la reforma agraria bajo el marco jurídico vigente; y, por otra parte, la democratización de la vida política de Morelos.

Si en realidad se pretende la pacificación de Chiapas, hay que construirla sobre bases realistas: 1) quitar los soportes —*de acción u omisión*— de los que penden los escuadrones paramilitares y castigar debidamente a los responsables intelectuales y materiales del cobarde asesinato de hombres, mujeres y niños; 2) retirar las tropas federales de la zona de conflicto como signo de concordia y de buena fe para un diálogo respetuoso; y 3) conceder a los zapatistas la opción de una *paz con dignidad*. Por el bien de México, *hay que hacerlo ya*.